

ECUADOR: PETRÓLEO Y CONTRADICCIONES

Jorge NUÑEZ*

La descomposición política del quinto gobierno de Velasco Ibarra¹ y el anuncio de la inminente explotación del petróleo de la hoya amazónica determinaron un nuevo relevo en la administración del Estado ecuatoriano en febrero de 1972. El cambio supuso el ascenso al poder de un gobierno militar que se autoproclamó *nacionalista y revolucionario*, presidido por el general Guillermo Rodríguez Lara.

Más reformista (y modernizador) que revolucionario, este nuevo gobierno de las fuerzas armadas acreditó a su favor —al menos en una primera etapa— una política nacionalista y progresista en materia de defensa de los recursos naturales, especialmente el petróleo. Entre las acciones que legitiman esta última afirmación se pueden destacar: 1) reversión al Estado de unos cuatro millones de hectáreas concedidas a compañías extranjeras por gobiernos anteriores, 2) ingreso del Ecuador a la OPEP, y 3) control por parte de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) del 25% de los activos y derechos de TEXACO-GULF, el consorcio estadounidense que explota el «oro negro» en Ecuador. Complementariamente, el gobierno de Rodríguez Lara dispuso una elevación del impuesto a la renta de las petroleras, contrató la construcción de la refinería estatal, constituyó la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC), entre otras acciones de signo positivo.

Las exportaciones petroleras significaron al país un inusitado incremento en los ingresos de divisas, desde 199 millones de dólares en 1971 —año previo a la explotación de petróleo— hasta 1.050 millones en 1974. En este último año el petróleo representó aproximadamente los 3/5 de las exportaciones totales y financió los 2/3 del presupuesto fiscal.

* Profesor de la Universidad Central del Ecuador.

¹ Último gobierno de J. M. Velasco Ibarra por el cual fue elegido en 1968.

La "pax" petrolera

El *boom* petrolero —1972-1974— dio origen a una euforia económica general y a un modelo político *sui generis* orientado a paliar las contradicciones sociales mediante una dispendiosa política de gasto público, que se tradujo en colosales subsidios especialmente al sector agrícola, la capitalización de las entidades oficiales de crédito, la expansión de la burocracia estatal, etcétera. Asimismo, la prosperidad de la balanza comercial llevó al régimen a reducir los aranceles de importación (para aumentar el *confort* de las clases de ingresos altos y medios), así como a disminuir los impuestos a la exportación y de este modo satisfacer los intereses de la vieja oligarquía costeña. Sin embargo, un reducido sector de la burguesía industrial asentado principalmente en Quito habría de resultar —dado su proyecto modernizante— el mayor beneficiario de la bonanza petrolera.

En suma, el flujo de los «petrodólares» desencadenó en Ecuador un acelerado proceso de modernización ficticia y aparente, donde un estado robustecido financieramente asumía el rol que históricamente no había cumplido una burguesía larvaria y parasitaria, orientada al comercio de exportación de productos tropicales e importación de manufacturas industriales. Inclusive, la coyuntura petrolera resultó en la constitución de un sector estatal de relativa importancia en la economía², todo esto dentro de un aparente clima de estabilidad y armonía sociales.

Recesión y crisis política

Hacia finales de 1974, el consorcio TEXACO-GULF desencadenó una violenta campaña contra la política nacionalista del gobierno militar. El primer «logro» de esa campaña fue la salida del ministro de Recursos Naturales, Jarrín Ampudia, cuando éste, en cumplimiento de una resolución de la OPEP, buscaba llevar al 51% la participación estatal en el negocio petrolero.

² El sector estatal —incluidas algunas empresas mixtas— que se constituyó y desarrolló en los años del *boom*: las empresas de aviación TAME y Ecuatoriana, la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC), la flota mercante nacional (TRASNAVE), la empresa estatal de petróleos (CEPE), la Corporación Financiera Nacional (CVCFN), la Empresa Nacional de Comercialización (ENAC), la Empresa Nacional de Productos Vitales (ENPROVIT), la Dirección Nacional de Industrias del Ejército (DINE), el ingenio azucarero AZTRA, entre otras.

En la continuación de la escalada, las petroleras sabotearon la producción de crudo y suspendieron las exportaciones aduciendo la "no-competitividad" del crudo ecuatoriano, argumento a todas luces falso dada la ubicación del país en una zona deficitaria de «oro negro», los bajos costos de producción y la alta calidad del crudo oriental. Enfrentado al dilema de conciliar con las petroleras o nacionalizarlas, Rodríguez Lara se decidió por la primera alternativa, en prueba de lo cual dispuso una rebaja de 0.43 dólares en el precio de referencia (julio de 1975); y, tres meses más tarde, mientras la OPEP resolvía una elevación de precios del 10%, Ecuador disponía una alza únicamente del 4%.

Esta política de concesiones a los monopolios imperialistas terminó por vulnerar el "milagro" ecuatoriano, dejando al régimen sin capacidad de manipulación social.

La crisis que sobrevino en 1975 era, pues, la crisis de un estilo de desarrollo y modernización adelantado sin una previa remoción de los obstáculos estructurales e institucionales que históricamente han marcado el atraso y subdesarrollo del país. Los planes iniciales fueron paulatinamente abandonados y los viejos problemas aparecieron de nuevo en la superficie.

En el nivel político, la "pax" petrolera llegó a su fin, y las clases dominantes tradicionales (especialmente la oligarquía agro-exportadora y terratenientes), inconformes con la política desarrollista y «estatista» del régimen que en alguna forma redujo sus márgenes de acumulación, reactivaron su oposición a Rodríguez Lara bajo las consignas de una mayor revisión de la política petrolera y denuncia de la Decisión 24 del *Pacto Andino*; es decir, los mismos argumentos exhibidos por el imperialismo y las transnacionales.

La ofensiva tuvo éxito y en enero de 1976 un triunvirato militar desplazaba a Rodríguez Lara bajo el mandato específico de desbrozar el camino para que, en forma directa, una burguesía incondicional del imperialismo asuma de nueva cuenta el control del Estado.

Sin embargo, la crisis ideológica y política de la misma burguesía, el surgimiento de las organizaciones proletarias como actores importantes en la política ecuatoriana y la aparición de un ala progresista en las fuerzas armadas, están sembrando de escolios el proyecto derechista de retorno a la llamada «democracia representativa». En esta circunstancia, el planteamiento de nacionalización del petróleo que sostienen los sectores avanzados de la sociedad ecuatoriana se ha convertido en punto crucial del alineamiento y lucha política.